

**No. 42028**

---

**Colombia  
and  
Ecuador**

**Agreement on judicial cooperation and mutual assistance in criminal matters  
between the Republic of Colombia and the Republic of Ecuador. Santa Fe de  
Bogotá, 18 December 1996**

**Entry into force:** *26 July 2001 by notification, in accordance with article XXIII*

**Authentic text:** *Spanish*

**Registration with the Secretariat of the United Nations:** *Colombia, 8 November 2005*

---

**Colombie  
et  
Équateur**

**Accord de coopération judiciaire et d'entraide mutuelle en matière pénale entre la  
République de Colombie et la République de l'Équateur. Santa Fe de Bogotá, 18  
décembre 1996**

**Entrée en vigueur :** *26 juillet 2001 par notification, conformément à l'article XXIII*

**Texte authentique :** *espagnol*

**Enregistrement auprès du Secrétariat des Nations Unies :** *Colombie, 8 novembre 2005*

[ SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL ]

**CONVENIO DE COOPERACION JUDICIAL Y ASISTENCIA MUTUA  
EN MATERIA PENAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA  
REPUBLICA DEL ECUADOR**

Los Gobiernos de la República de Colombia y de la República del Ecuador, en adelante denominadas "las Partes":

**TENIENDO EN CUENTA** los lazos de amistad y de cooperación que los unen;

**CONSCIENTES** del incremento de la actividad delictiva, convienen en prestarse la más amplia cooperación, de conformidad con el procedimiento que se describe a continuación;

**INSPIRADOS** en el deseo de intensificar la asistencia legal y la cooperación mutua en asuntos criminales;

**RECONOCIENDO** que la lucha contra el crimen requiere de la acción conjunta de los Estados;

**DESEOSOS** de adelantar una acción conjunta para la prevención, control y represión del crimen en todas sus manifestaciones, a través de la coordinación de acciones y la implementación de programas concretos, y en la activación de mecanismos tradicionales para asistencia legal y judicial; y,

**OBSERVANDO** las normas constitucionales, legales y administrativas de sus Estados, así como el respeto por los principios de la Ley Internacional, especialmente aquellos relacionados con la soberanía, integridad territorial y no intervención;

**CELEBRAN EL PRESENTE ACUERDO:**

**ARTICULO I  
DEFINICIONES**

Para los efectos del presente Acuerdo:

- a) "Carta rogatoria, exhorto o solicitud de asistencia judicial" se entenderán como sinónimos;

- b) "Decomiso": significa la privación con carácter definitivo de algún bien, sólo por decisión de un tribunal o de otra autoridad judicial competente, de conformidad con la legislación de cada Parte.
- c) "Instrumentos del delito": significa cualquier bien utilizado o destinado a ser utilizado para la comisión de cualquier delito;
- d) "Producto del Delito": significa bienes de cualquier índole, derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;
- e) "Bienes": significa los activos de cualquier tipo, corporales o incorporeales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles y los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u otros derechos sobre dichos activos; y,
- f) "Embargo Preventivo, Secuestro, Incautación de Bienes u otras medidas cautelares de carácter real": significan la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes, así como la custodia y el control temporal de bienes por mandamiento expedido por un tribunal o Autoridad Judicial Competente.

## **ARTICULO II AMBITO DE APLICACION**

1. Las Partes se obligan a prestarse asistencia recíproca, de conformidad con las disposiciones del presente Convenio y de sus respectivos ordenamientos jurídicos, en la realización de investigaciones y de procedimientos judiciales.
2. Este instrumento no deberá interpretarse contrariamente a otras obligaciones de las Partes derivadas de otros Tratados, ni impedirá que las Partes se presten asistencia de conformidad con otros Tratados o Acuerdos.
3. Este Acuerdo no se aplicará a:
  - a) La detención de personas con el fin de que sean extraditadas, ni a las solicitudes de extradición;
  - b) La transferencia de personas condenadas con el objeto de que cumplan sentencia penal en su país de origen, aspecto que está regulado por otro Convenio;
  - c) La asistencia a particulares o terceros Estados.
4. Este Acuerdo no facultará a las Partes para ejecutar, en el territorio del Estado donde se realizan las diligencias, funciones reservadas

exclusivamente a las autoridades de dicho Estado de conformidad con su legislación interna

### **ARTICULO III DOBLE INCRIMINACION**

1. La asistencia se prestará aún cuando el hecho por el cual se procede en la Parte Requerente no sea considerado como delito por la ley de la Parte Requerida.

2. No obstante, para la ejecución de las inspecciones, registros domiciliarios, y allanamientos la asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte Requerida prevé como delito el hecho por el cual se procede en la Parte Requerente.

### **ARTICULO IV ALCANCE DE LA ASISTENCIA**

1. Las Partes se comprometen a prestarse la más amplia cooperación judicial en forma recíproca, en las diferentes etapas de los procedimientos judiciales en materia penal. Dicha asistencia comprenderá, entre otras:

- a) Localización e identificación de personas y bienes;
- b) Notificación de actos judiciales;
- c) Remisión de documentos e informaciones judiciales;
- d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales;
- e) Recepción de testimonios;
- f) Citación y traslación voluntaria de personas para los efectos del presente Convenio, en calidad de testigos o peritos;
- g) Traslación voluntaria de personas detenidas con el fin exclusivo de rendir testimonio en el territorio de la Parte Requerente;
- h) Embargo preventivo, secuestro, incautación u otras medidas cautelares de carácter real y decomiso de bienes;
- i) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la Parte Requerida lo permita.

2. Los funcionarios de la Parte Requerente conforme a la autorización de las Autoridades Competentes de la Parte Requerida, podrán presenciar la práctica de las actuaciones solicitadas siempre que ello no contravenga lo dispuesto en su legislación interna. Para este efecto, las Partes facilitarán el ingreso en el territorio de la Parte Requerida de las Autoridades Competentes.

3. Las Partes podrán celebrar acuerdos complementarios que permitan agilizar la asistencia prevista en este artículo.

#### **ARTICULO V LIMITACIONES EN EL ALCANCE DE LA ASISTENCIA**

1. La Parte Requirente no usará ninguna información o prueba obtenida mediante este Convenio para fines distintos a los declarados en la solicitud de asistencia judicial, sin previa autorización de la Parte Requerida.

2. En casos excepcionales, si la Parte Requirente necesitare divulgar y utilizar, total o parcialmente, la información o prueba para propósitos diferentes a los especificados, solicitará la autorización correspondiente a la Parte Requerida la que a su juicio podrá acceder o negar, total o parcialmente lo solicitado, según su legislación interna.

#### **ARTICULO VI AUTORIDADES CENTRALES**

1. Cada una de las Partes designará una Autoridad Central encargada de presentar, recibir y/o tramitar las solicitudes que correspondan en el ámbito de este Convenio. Para este fin, dichas Autoridades se comunicarán directamente con el objeto de analizar, decidir y/o conceder lo solicitado, si no contraviene la legislación interna.

2. Son Autoridades Centrales para la República de Colombia: La Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y del Derecho; y, la Autoridad Central para la República del Ecuador es la Corte Suprema de Justicia.

3. Cuando el Ecuador formule solicitud a la República de Colombia se dirigirá a la Fiscalía General de la Nación, organismo que conferirá la asistencia solicitada con eficacia probatoria acorde con su régimen jurídico - constitucional; cuando Colombia formule solicitud a la República del Ecuador lo hará a través de la Fiscalía General de la Nación o el Ministerio de Justicia y del Derecho.

**ARTICULO VII  
LEY APLICABLE**

1. Las solicitudes serán cumplidas de conformidad con la legislación de la Parte Requerida.
2. La Parte Requerida prestará la asistencia judicial de acuerdo con las formas y procedimientos especiales indicados en la solicitud de la Parte Requirente, salvo cuando éstas sean incompatibles con su ley interna.

**ARTICULO VIII  
CONFIDENCIALIDAD**

Las Partes Requerida y Requirente mantendrán bajo reserva la solicitud y el otorgamiento de la asistencia judicial, salvo que su levantamiento sea necesario para ejecutar el requerimiento, siempre de conformidad con su legislación interna y con la autorización de la otra Parte.

**ARTICULO IX  
SOLICITUDES DE ASISTENCIA JUDICIAL**

1. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito y contendrá al menos la siguiente información:
  - a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento judicial;
  - b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada;
  - c) Descripción de los hechos que constituyen el delito objeto de la investigación adjuntándose o transcribiéndose, en cuanto a los delitos, el texto de las disposiciones legales pertinentes;
  - d) Fundamentos de hecho y de derecho de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desea que se practique;
  - e) Término dentro del cual por la naturaleza de lo solicitado, la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida;
  - f) Identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada para los fines de auxilios judiciales previstos en este Convenio.
2. Sólo bajo circunstancias de urgencia, las solicitudes podrán hacerse a través de una transmisión por fax o cualquier otro medio electrónico, sin perjuicio de su confirmación por escrito a la mayor brevedad posible.

**ARTICULO X  
MOTIVOS CONDICIONANTES**

1. Si la Autoridad Competente de la Parte Requerida, determina que la ejecución de una solicitud habrá de obstaculizar alguna investigación o procedimiento penal que se esté realizando en dicho Estado, podrá aplazar o condicionar su cumplimiento, total o parcialmente, señalando expresamente los motivos o causas para ello.

2. La Autoridad de la Parte Requerida pondrá en conocimiento de la Autoridad de la Parte Requirente lo expuesto en el numeral anterior, a fin que ésta acepte la asistencia condicionada, en cuyo caso tendrá que someterse a las condiciones establecidas.

**ARTICULO XI  
RECHAZO DE LA SOLICITUD**

1. La Parte Requerida podrá negar la asistencia cuando, a su juicio:

- a) La solicitud de asistencia judicial sea contraria a su ordenamiento jurídico nacional y/o a las disposiciones de este Convenio;
- b) Considere que el cumplimiento de la solicitud pueda obstaculizar una investigación o proceso penal en curso en dicho Estado, salvo lo dispuesto en el Artículo X del presente Convenio;
- c) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito respecto del cual la persona haya sido exonerada de responsabilidad penal definitivamente, o habiéndosela condenado, se hubiere cumplido o extinguido la pena;
- d) La investigación haya sido iniciada con el objeto de procesar o discriminar en cualquier forma a una persona o grupo de personas por razones de raza, sexo, condición social, nacionalidad, religión, ideología o cualquier otra forma de discriminación;
- e) El otorgamiento de la asistencia pueda afectar el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales del Estado Requerido;
- f) La solicitud de asistencia judicial se refiera a un delito político, militar o conexo con éstos.

2. La Parte Requerida informará mediante escrito motivado a la Parte Requirente la denegación de la asistencia.

## **ARTICULO XII EJECUCION DE LA SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL**

1. La Parte Requerida fijará la fecha y el lugar de la ejecución de la solicitud de asistencia judicial y las comunicará por escrito a solicitud de la Parte Requirente.

2. Las pruebas que se practiquen por las Autoridades Competentes de la Parte Requerida se ejecutarán de conformidad con su ordenamiento jurídico. La valoración de dichas pruebas se regirá por el ordenamiento interno de la Parte Requirente.

## **ARTICULO XIII COMPARECENCIA ANTE LAS PARTES**

1. La solicitud de asistencia judicial enviada a la Parte Requerida, que tenga por objeto la citación a un testigo o perito ante las Autoridades Competentes de la Parte Requirente, deberá ser transmitida por ésta al menos con 45 días de anticipación a la fecha fijada para la ejecución de la diligencia objeto de la solicitud. No obstante, la Parte Requirente podrá, en casos excepcionales, disminuir dicho plazo.

2. La Autoridad Competente de la Parte Requerida procederá a efectuar la citación según la solicitud formulada, correspondiendo a la persona citada decidir libremente y de manera expresa, su voluntad de comparecer personalmente al territorio de la Parte Requirente o rendir su testimonio por escrito.

3. Si la persona citada alega inmunidad o incapacidad según la legislación de la Parte Requerida, ésta será resuelta por la Autoridad Competente de la Parte Requerida y notificada a la Parte Requirente..

4. La solicitud de asistencia judicial deberá asegurar la facilitación de transporte, el importe de los viáticos, dietas y seguro de vida y/o accidentes en favor de la persona citada, que voluntariamente consienta en trasladarse a la Parte Requirente, únicamente por el plazo estrictamente necesario a juicio de la Parte Requirente, plazo que no podrá exceder de ocho días entre la fecha de su llegada al territorio y su regreso al país de origen.



**ARTICULO XIV  
PROTECCION PERSONAL**

1. El testigo o perito que como consecuencia de una citación compareciere ante la Autoridad Competente de la Parte Requirente, no podrá ser perseguido, detenido o sometido a ninguna restricción de su libertad personal en el territorio de dicho Estado, por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio de la Parte Requerida.

2. La garantía prevista en el numeral precedente, cesará en sus efectos cuando evacuada la diligencia para la que comparece el testigo o perito, no regresare a su país de origen en un plazo máximo de 5 días posteriores a su cooperación judicial. El plazo podrá prorrogarse en circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado por la Parte Requirente.

**ARTICULO XV  
SOBRE LOS DETENIDOS**

1. Cuando la citación para declarar ante la Autoridad Competente de la Parte Requirente se refiera a una persona detenida en el territorio de la Parte Requerida, para acceder a la solicitud será indispensable que el detenido preste su consentimiento por escrito y gozará de las prestaciones previstas en el numeral 4 del Artículo 13 de este Convenio.

2. La Parte Requirente estará obligada a mantener bajo custodia a la persona trasladada y a devolverla en las mismas condiciones, tan pronto como hubiere cesado la necesidad que motivó la solicitud de su desplazamiento a menos que, la Autoridad Central de la Parte Requerida solicitare expresamente y por escrito que tal persona fuera puesta en libertad y gozará de la protección prevista en el Artículo 14 del presente Convenio

3. En todos los casos, la decisión sobre un desplazamiento personal en virtud del numeral 1 del presente artículo, será discrecional de la Parte Requerida, y su negativa deberá fundamentarse en razones constitucionales o legales y otras consideraciones de seguridad o conveniencia del Estado Requerido.

**ARTICULO XVI  
MEDIDAS PROVISIONALES O CAUTELARES**

1. Las Partes contratantes podrán solicitarse reciprocamente la ejecución de las medidas cautelares previstas en el literal f) del Artículo 1 del presente Convenio para asegurar que los bienes, instrumentos y productos del delito o el valor equivalente, estén disponibles para la eventual orden de decomiso o la indemnización de daños o perjuicios ocasionados como consecuencia de una condena penal .

2. Un requerimiento de medida cautelar efectuado en virtud de este Artículo, deberá incluir, además de lo previsto en el Artículo 9 del presente Convenio, lo siguiente:

- a) Una copia de la orden judicial en firme que la justifique con la determinación de sus fundamentos de hecho y de derecho; y,
- b) Si fuera posible, la descripción de los bienes, ubicación y valor estimado en el ámbito del literal e) del Artículo 1 de este Convenio; y, la relación justificativa vinculatoria de la persona sobre cuyos bienes recaiga la medida cautelar.

3. Las Autoridades Centrales de cada una de las Partes se informarán con prontitud sobre el ejercicio de cualquier impugnación que pueda enervar la medida cautelar solicitada y la decisión adoptada sobre ella.

4. La Autoridad Central de la Parte Requerida podrá imponer un término que limite la duración de la medida cautelar solicitada, el cual será comunicado con prontitud a la Autoridad Central de la Parte Requerente, explicando su motivación.

5. Cualquier requerimiento deberá ser ejecutado únicamente conforme a la legislación interna de la Parte Requerida y en particular, en observancia y garantía de los derechos constitucionales de cualquier persona que pudiera ser afectada por la ejecución de la medida.

**ARTICULO XVII  
DECOMISO Y SU EJECUCION**

1. Las Partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse cooperación para ejecutar medidas definitivas sobre bienes vinculados a procesos penales, siempre y cuando medie una decisión judicial definitiva debidamente ejecutoriada.

2. Para los efectos del presente Artículo, se aplicará lo dispuesto en los Artículos 9 y 16 numeral 2 de este Convenio.

3. Para los casos de delitos relacionados con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y de conformidad con la "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas" de 1.988, las Partes acordarán la manera de compartir el valor de los bienes decomisados como resultado de la cooperación prevista en este instrumento.

#### **ARTICULO XVIII INTERESES DE TERCEROS DE BUENA FE SOBRE LOS BIENES**

1. Conforme a lo previsto en el presente Convenio, la Parte Requerida adoptará según su Ley Nacional las medidas necesarias para proteger los intereses y derechos de terceras personas de buena fe sobre los bienes, que pudieren afectarse por la ejecución de las solicitudes de asistencia judicial.

2. Cualquier persona afectada por una orden de embargo preventivo, secuestro, incautación o decomiso, podrá impugnar y/o recurrir la medida adoptada de conformidad con la legislación interna de la Parte Requerida.

#### **ARTICULO XIX GASTOS**

1. Los gastos ordinarios que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia judicial serán sufragados por la Parte Requerida. Cuando se requiera gastos extraordinarios, las Partes se consultarán para determinar los términos y condiciones en que se dará cumplimiento al requerimiento y la manera en que dichos gastos deberán sufragarse.

2. Los gastos de viaje, alojamiento y otros expensas previstas en este Convenio en favor de las personas que deban trasladarse en virtud de una solicitud de asistencia judicial, correrán por cuenta de la Parte Requirente.

#### **ARTICULO XX EXENCION DE LEGALIZACIÓN**

Los documentos previstos en el presente Acuerdo, suscritos y transmitidos por las Autoridades Centrales de cada Estado, estarán exentos de toda legalización consular o formalidad análoga.

**ARTICULO XXI  
CONSULTAS**

Las Autoridades Centrales de las Partes celebrarán consultas, para asegurar el eficaz cumplimiento de este Convenio.

**ARTICULO XXII  
SOLUCION DE CONTROVERSIAS**

Cualquier controversia que surja entre las Partes relacionada con la interpretación o aplicación de este Convenio, será resuelta entre las Partes, por vía diplomática.

**ARTICULO XXIII  
ENTRADA EN VIGOR Y DENUNCIA**

1. El presente Convenio entrará en vigor a los sesenta (60) días contados a partir de la fecha en que las Partes, se comuniquen por Notas Diplomáticas el cumplimiento de sus requisitos constitucionales y legales.

2. Este Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes en cualquier momento, mediante Nota Diplomática la cual surtirá efecto seis (6) meses después de la fecha de recepción por la otra Parte. La denuncia no afectará las solicitudes de asistencia judicial en curso.

Suscrito en Santafé de Bogotá, a los diez y ocho días (18) del mes de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996), en dos ejemplares, en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.

  
CAMILLO BERMEJO  
POR EL GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DE COLOMBIA

  
GALO LEORO F.  
POR EL GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DEL ECUADOR

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

AGREEMENT ON JUDICIAL COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE REPUBLIC OF COLOMBIA AND THE REPUBLIC OF ECUADOR

The Governments of the Republic of Colombia and the Republic of Ecuador, hereinafter referred to as “the Parties”;

Bearing in mind the ties of friendship and cooperation uniting them;

Aware of the increase in criminal activity, agree to cooperate to the fullest extent possible in accordance with the procedures set out below;

Prompted by the desire to strengthen judicial assistance and cooperation in criminal matters;

Recognizing that the fight against crime requires the joint action of States;

Wishing to take joint action to prevent, control and suppress crime in all its manifestations through the coordination of activities and the implementation of specific programmes and to streamline the traditional mechanisms of legal and judicial assistance; and

Respecting the constitutional, legal and administrative norms of their States, and the principles of international law, especially those related to sovereignty, territorial integrity and non-intervention;

Have agreed as follows:

*Article I. Definitions*

1. For the purposes of this Agreement:

(a) “Letters rogatory, rogatory commission and request for judicial assistance” shall be regarded as synonymous;

(b) “Confiscation” means permanent removal of property, pursuant to the decision of a court or other competent judicial authority, in accordance with the legislation of each Party;

(c) “Instruments of crime” means any property used or intended to be used for the commission of an offence;

(d) “Proceeds of crime” means property of any kind directly or indirectly derived or realized as a result of the commission of an offence;

(e) “Property” means any kind of assets, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title or other right thereto; and

(f) “Preventive embargo, seizure or impoundment of property or other preventive attachment of property” means temporary prohibition on the transfer, conversion, disposal or release of property and temporary safekeeping and control of property pursuant to an order from a court or other competent judicial authority.

*Article II. Scope*

1. The Parties undertake to assist each other, in accordance with the provisions of this Agreement and of their respective legal systems, in conducting judicial investigations and proceedings.

2. The interpretation of this instrument shall not be contrary to other obligations of the Parties under other treaties, nor shall it prevent the Parties from assisting each other pursuant to other treaties or agreements.

3. This Agreement does not apply to:

(a) The detention of persons with a view to their extradition, or requests for extradition;

(b) The transfer of convicted persons with a view to their serving a criminal sentence in their country of origin, which is governed by another agreement;

(c) Assistance to individuals or third States.

4. This Agreement shall not empower the Parties to discharge functions in the territory of the State in which the inquiries are being carried out, such functions being the sole preserve of the authorities of that State in accordance with its domestic legislation.

*Article III. Dual criminality*

1. Assistance shall be provided even if the act in respect of which proceedings have been instituted in the requesting Party is not considered a crime under the law of the requested Party.

2. Nonetheless, for the execution of inspections, house searches and raids, assistance shall be provided only if the act in respect of which proceedings have been instituted in the requesting Party is considered a crime under the legislation of the requested Party.

*Article IV. Scope of assistance*

1. The Parties undertake to provide each other with extensive judicial assistance in the various stages of judicial proceedings in criminal matters. Such assistance shall include, inter alia:

(a) Location and identification of persons and property;

(b) Service of process;

(c) Delivery of judicial documents and information;

(d) Execution of house searches and judicial inspections;

(e) Taking of testimony;

(f) Summoning and voluntary transfer of witnesses or experts for the purposes of this Agreement;

(g) Voluntary transfer of persons in custody for the sole purpose of giving testimony in the territory of the requesting Party;

(h) Preventive embargo, seizure, impoundment or other preventive attachment and confiscation of property;

(i) Any other form of assistance, provided that it is permitted under the legislation of the requested Party.

2. Subject to the authorization of the competent authorities of the requested Party, officials of the requesting Party may be present when the requested action is being carried out, provided that their presence does not contravene domestic legislation. For this purpose, the Parties shall facilitate the entry into the territory of the requested Party of the competent authorities.

3. The Parties may conclude complementary agreements aimed at streamlining the assistance provided for in this article.

#### *Article V. Limits on the scope of assistance*

1. The requesting Party shall not, without the prior consent of the requested Party, use any information or evidence obtained under this Agreement for purposes other than those stated in the request for judicial assistance.

2. In exceptional cases, if the requesting Party needs to disclose or use, in whole or in part, the information or evidence for purposes other than those specified, it shall request the appropriate authorization from the requested State, which may grant or refuse the request in whole or in part, at its discretion, in accordance with its domestic legislation.

#### *Article VI. Central authorities*

1. Each Party shall designate a Central Authority responsible for submitting, receiving and/or processing requests made pursuant to this Agreement. To this end, the said Authorities shall communicate with each other directly with a view to analysing, deciding and/or granting the request, provided it does not contravene domestic legislation.

2. For the Republic of Colombia, the Central Authority shall be: the Office of the Attorney General and the Ministry of Justice and Legal Affairs; and the Central Authority for the Republic of Ecuador shall be the Supreme Court of Justice.

3. Ecuador shall submit its requests to the Republic of Colombia to the Office of the Attorney General, a body which shall provide the requested assistance with evidentiary value in accordance with its legal/constitutional regime; Colombia shall make requests to the Republic of Ecuador through the Office of the Attorney General or the Ministry of Justice and Legal Affairs.

#### *Article VII. Applicable law*

1. Requests shall be executed in accordance with the law of the requested Party.

2. The requested Party shall provide judicial assistance in accordance with the special forms and procedures indicated in the request from the requesting Party, unless these are incompatible with its domestic law.

*Article VIII. Confidentiality*

The requested and requesting Parties shall keep the request for and granting of judicial assistance confidential, unless their disclosure is necessary for the execution of the request, in which case they shall act in accordance with their domestic legislation and with the authorization of the other Party.

*Article IX. Requests for judicial assistance*

1. Requests for judicial assistance shall be made in writing and must at least contain the following information:

(a) The name of the competent authority in charge of the investigation or judicial proceedings;

(b) The purpose of the request and a description of the assistance sought;

(c) A description of the acts which constitute the offence under investigation, together with a reproduced or attached copy of the relevant legal provisions pertaining to the offence;

(d) Factual and legal grounds for any special procedures that the requesting Party wishes to be followed;

(e) The deadline by which, given the nature of the request, the requesting Party would like the request to be met;

(f) The identity, nationality, and residence or domicile of the person to be summoned or notified to appear for the purpose of providing judicial assistance pursuant to this Agreement.

2. In urgent circumstances only, requests may be transmitted by fax or any other electronic means but must be confirmed in writing as soon as possible.

*Article X. Conditional assistance*

1. Should the competent authority of the requested Party determine that execution of a request would interfere with a criminal investigation or proceeding under way in that State, it may postpone the execution or place conditions thereon, in whole or in part, expressly giving the reasons for its decision.

2. The authority of the requested State shall inform the authority of the requesting Party accordingly to see whether the latter agrees to the conditional assistance, in which case it will have to accept the conditions outlined.

*Article XI. Refusal of assistance*

1. The requested Party may refuse to assist, at its discretion, if:

(a) The request for judicial assistance is contrary to its domestic legal system and/or the provisions of this Agreement;



(b) It believes that execution of the request would interfere with a criminal investigation or proceeding already instituted in that State, except as provided in article X of this Agreement;

(c) The request for judicial assistance relates to an offence in respect of which the individual has been found not guilty or, if convicted, has served the sentence or the sentence has been extinguished;

(d) The investigation has been opened for the purpose of prosecuting or discriminating in any way against a person or group of persons on account of race, sex, social status, nationality, religion, ideology or any other form of discrimination;

(e) The granting of assistance may affect the public order, sovereignty, national security or fundamental public interests of the requested State;

(f) The request for judicial assistance refers to a political or military offence or is related thereto.

2. The requested Party shall inform the requesting Party of its refusal in writing, stating the reasons therefor.

*Article XII. Execution of the request for judicial assistance*

1. Upon request from the requesting Party, the requested Party shall set the date and place for execution of the request for judicial assistance and shall communicate them in writing.

2. The taking of evidence by the competent authorities of the requested Party shall be conducted in accordance with its legal system. The assessment of such evidence shall be governed by the legal system of the requesting Party.

*Article XIII. Appearance before the Parties*

1. Any request for judicial assistance sent to the requested Party that involves a summons for a witness or expert to appear before the competent authorities of the requesting Party shall be transmitted at least 45 days prior to the date set for the proceedings referred to in the request. Nonetheless, the requesting Party may, in exceptional cases, reduce that period.

2. The competent authority of the requested Party shall proceed to serve the summons in accordance with the request formulated, and the summoned person shall freely and expressly decide whether he or she wishes to appear in the territory of the requesting Party in person or submit his or her testimony in writing.

3. If the summoned person claims immunity or incapacity under the legislation of the requested Party, the issue shall be settled by the competent authority of the requested State and the outcome shall be communicated to the requesting Party.

4. The request for judicial assistance shall guarantee the provision of transport and the entitlement to travel costs, per diem and life insurance or accident insurance for the summoned person, who freely consents to travel to the requesting Party only for as long as

is deemed strictly necessary by the requesting Party, a period which may not exceed eight days from the date of arrival in the territory to the date of return to the country of origin.

*Article XIV. Personal protection*

1. No witness or expert appearing before the competent authority of the requesting Party in response to a summons shall be prosecuted, detained or subjected to any restriction on his or her personal freedom in the territory of the said State for acts or sentences predating his or her departure from the territory of the requested Party.

2. The guarantee provided for in paragraph 1 shall cease to have effect if, on completion of the inquiry for which the person is appearing as a witness or expert, he or she fails to return to the country of origin within a maximum of five days following his or her judicial cooperation. The deadline may be extended in cases of force majeure or unforeseeable circumstances duly confirmed by the requesting Party.

*Article XV. Persons in custody*

1. If the summons to testify before the competent authority of the requesting Party relates to a person who is in custody in the territory of the requested State, he or she must consent in writing in order for the request to be granted, and shall receive the benefits provided for in article XIII, paragraph 4, of this Agreement.

2. The requesting Party shall be required to keep the person transferred in custody and to return him or her on the same terms as soon as the need that prompted the request for his transfer has been met, unless the Central Authority of the requested Party specifically requests in writing that the person be released and enjoy the protection provided for in article XIV of this Agreement.

3. The decision to make a transfer pursuant to paragraph 1 of this article shall be at the discretion of the requested Party in all cases, and refusal must be based on constitutional or legal reasons and other considerations related to the security or convenience of the requested State.

*Article XVI. Provisional or precautionary measures*

1. Either Party may ask the other to execute the precautionary measures provided for in article I (f) of this Agreement to ensure that the property, instruments and proceeds of the crime or the equivalent value are available if confiscation is ordered or to compensate for damage or losses which have arisen as a result of a criminal conviction.

2. A request for precautionary measures submitted under this article shall include, in addition to the information called for under article IX of this Agreement, the following:

(a) A copy of the final judicial order justifying the request, together with its factual and legal basis;

(b) If possible, a description of the property and its location and estimated value in the context of article I (e) of this Agreement and the connection to the person in respect of whose property the precautionary measure is taken.

3. The Central Authorities of each Party shall promptly inform each other of any appeal proceedings which could render invalid the requested precautionary measure and the decision adopted in that respect.

4. The Central Authority of the requested Party may decide to limit the duration of the precautionary measure requested, and shall promptly notify the Central Authority of the requesting Party of such time limit, stating the reasons for it.

5. Any request shall be executed solely in accordance with the domestic legislation of the requested Party and in particular with strict respect for and guarantee of the constitutional rights of any person who may be affected by the execution of the measure.

#### *Article XVII. Confiscation and its enforcement*

1. In accordance with their domestic legislation, the Parties may cooperate to execute permanent measures with regard to property linked to criminal proceedings, provided that a final and enforceable judicial decision has been made.

2. For the purposes of this article, the provisions of article IX and article XVI, paragraph 2, of this Agreement shall be applied.

3. In the case of crimes involving illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances, the Parties shall agree how to divide, in accordance with the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, the value of the property confiscated as a result of the cooperation provided for in this Agreement.

#### *Article XVIII. Interests of bona fide third parties in the property*

1. Pursuant to the provisions of this Agreement, the requested Party shall take, in accordance with its domestic law, any necessary measures to protect the interests and rights of bona fide third parties as regards property affected by the execution of requests for judicial assistance.

2. Any person affected by an order for preventive embargo, seizure, impoundment or confiscation may file an appeal in accordance with the domestic legislation of the requested Party.

#### *Article XIX. Expenses*

1. The ordinary costs of executing a request for judicial assistance shall be paid by the requested Party. If extraordinary expenses are needed, the Parties shall consult one another in order to determine the terms and conditions for execution of the request and the manner in which such expenses shall be paid.

2. The travel expenses, accommodation and other expenses provided for in this Agreement of persons who are obliged to travel in fulfilment of a request for judicial assistance shall be the responsibility of the requesting Party.

*Article XX. Exemption from authentication*

The documents mentioned in this Agreement, signed and submitted by the Central Authorities of the States, shall be exempt from consular authentication or any other similar formality.

*Article XXI. Consultations*

The Central Authorities of the Parties shall hold consultations with a view to ensuring that this Agreement is implemented effectively.

*Article XXII. Settlement of disputes*

Any dispute arising between the Parties in relation to the interpretation or application of this Agreement shall be settled by the Parties through the diplomatic channel.

*Article XXIII. Entry into force and denunciation*

1. This Agreement shall enter into force sixty (60) days after the date on which the Parties notify one another through an exchange of diplomatic notes that their respective constitutional and legal requirements have been completed.

2. Either Party may denounce this Agreement at any time by means of a diplomatic note, which shall take effect six (6) months after the date on which it is received by the other Party. Such denunciation shall not affect requests for judicial assistance already being processed.

Done at Santafé de Bogotá, on 18 December 1996, in duplicate in the Spanish language, both texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Colombia:

CAMILO REYES R.

For the Government of the Republic of Ecuador:

GALO LEORO F.

[TRANSLATION -- TRADUCTION]

ACCORD DE COOPÉRATION JUDICIAIRE ET D'ENTRAIDE MUTUELLE  
EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE ET  
LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

Les Gouvernements de la République de Colombie et de la République de l'Équateur, ci-après dénommés "les Parties";

Tenant compte des liens d'amitié et de coopération qui les unissent;

Conscients de la recrudescence de la criminalité, conviennent de coopérer dans la plus grande mesure possible conformément aux procédures indiquées ci-dessous;

Désireux de renforcer l'assistance judiciaire et la coopération en matière pénale;

Reconnaissant que la lutte contre la criminalité exige des efforts conjugués de la part des États;

Désireux de prendre des mesures conjointes afin de prévenir, contrôler et éliminer les infractions de toute nature grâce à la coordination d'activités et à la mise en oeuvre de programmes spécifiques et de simplifier les mécanismes traditionnels d'entraide juridique et judiciaire; et

Respectant les normes constitutionnelles, juridiques et administratives de leurs États ainsi que les principes du droit international, particulièrement en ce qui concerne la souveraineté, l'intégrité territoriale et la non intervention;

Sont convenus de ce qui suit :

*Article premier. Définitions*

a. Les expressions "lettres rogatoires", "commission rogatoire", et "requête d'entraide judiciaire", s'entendent comme synonymes;

b. Le terme "confiscation" s'entend de la privation définitive de biens, par décision d'une juridiction pénale ou autre autorité compétente conformément à la législation de chaque Partie;

c. L'expression "instrument d'un délit" s'entend de tout bien utilisé ou destiné à être employé pour commettre un délit;

d. L'expression "produits d'un délit" s'entend de tout bien, de quelque nature que ce soit, tiré ou obtenu directement ou indirectement, par qui que ce soit, de la commission d'un délit;

e. Le terme "bien" s'entend de tout actif de quelque nature, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, tangible ou intangible, ainsi que des pièces ou actes juridiques attestant de sa propriété ou de la possession d'autres droits sur ledit actif;

f. Les expressions "saisie conservatoire", "saisie" ou "mise sous séquestre" ou autre mesure préventive de blocage s'entendent de l'interdiction temporaire de céder, convertir, aliéner ou remettre un bien, ainsi que de la garde ou du contrôle de biens aux fins de leur préservation par une juridiction ou par une autorité compétente.

*Article II. Portée de l'entraide*

1. Les Parties s'engagent à s'entraider conformément aux dispositions du présent Accord et de leurs systèmes juridiques respectifs pour la conduite des enquêtes et des procédures judiciaires.

2. L'interprétation du présent instrument ne sera pas contraire à d'autres obligations incombant aux Parties en vertu d'autres traités ni n'empêchera les Parties de se fournir assistance conformément à d'autres traités ou accords.

3. Le présent Accord ne s'applique pas :

- a. A la détention de personnes en vue de leur extradition, ou de demandes d'extradition;
- b. Au transfert de personnes condamnées aux fins de purger leur peine dans leur pays d'origine, lequel transfert est régi par un autre accord;
- c. A l'assistance à des particuliers ou à des États tiers.

4. Le présent Accord n'autorise pas les Parties à s'acquitter de fonctions sur le territoire de l'État où les enquêtes sont menées, lesdites fonctions ne pouvant être assumées que par les autorités dudit État conformément à sa législation interne.

*Article III. Double inculpation*

1. L'entraide sera accordée même si le fait pour lequel la poursuite judiciaire est instituée dans la Partie requérante n'est pas considéré comme une infraction par la législation de la Partie requise.

2. Toutefois, pour l'exécution des inspections, des perquisitions et des descentes de police, l'entraide ne sera accordée que si l'acte pour lequel la procédure judiciaire a été instaurée dans la Partie requérante est considéré comme une infraction en vertu de la législation de la Partie requise.

*Article IV. Portée de l'entraide*

1. Les Parties s'engagent à se fournir mutuellement une assistance judiciaire extensive au cours des diverses étapes de la procédure judiciaire en matières pénales. Ladite assistance comprendra, notamment :

- a. La localisation et l'identification des personnes et des biens;
- b. La notification des actes de procédure;
- c. La remise des documents et des renseignements judiciaires;
- d. L'exécution de perquisitions et d'inspections judiciaires;
- e. La prise de témoignages;
- f. La remise des mandats de comparution et de transfert volontaire de témoins ou d'experts aux fins du présent Accord;
- g. Le transfert volontaire de personnes détenues aux seules fins de leur permettre de témoigner sur le territoire de la Partie requérante;

h. Des mesures préventives de séquestre, saisie, ou autres mesures préventives de saisie et de confiscation de biens;

i. Toute autre forme d'assistance, à condition qu'elle soit autorisée en vertu de la législation de la Partie requise.

2. Sous réserve de l'autorisation des autorités compétentes de la Partie requise, des représentants de la Partie requérante peuvent assister au déroulement de la procédure requise à condition que leur présence n'entrave pas l'application de la législation interne. À ces fins, les Parties faciliteront l'entrée sur le territoire de la Partie requise des autorités compétentes.

3. Les Parties peuvent conclure des accords complémentaires visant à simplifier l'entraide prévue dans le présent Article.

#### *Article V. Limites à la portée de l'entraide*

1. La Partie requérante n'utilisera pas sans l'autorisation préalable de la Partie requise tous renseignements ou preuves obtenus en vertu du présent Accord pour des fins autres que celles indiquées dans la demande d'entraide judiciaire.

2. Dans des cas exceptionnels, si la Partie requérante a besoin de divulguer ou d'utiliser, en tout ou en partie, les renseignements ou les preuves à des fins autres que celles spécifiées, elle demandera l'autorisation appropriée à la Partie requise qui pourra l'accorder ou la refuser en tout ou en partie, conformément à sa législation interne.

#### *Article VI. Autorités centrales*

1. Chaque Partie désigne une autorité centrale chargée de soumettre, recevoir et/ou faire suivre les demandes présentées conformément au présent Accord. À ces fins, lesdites autorités communiqueront directement entre elles afin d'analyser la requête, de prendre une décision à son égard et/ou d'y donner suite si elle n'est pas contraire à la législation interne.

2. Pour la République de Colombie, l'autorité centrale sera le Bureau du Procureur général et le Ministère de la Justice et des Affaires juridiques; pour la République de l'Équateur, l'autorité centrale sera la Cour Suprême de Justice.

3. L'Équateur présentera les requêtes adressées à la République de Colombie au Bureau du Procureur général, qui fournira l'entraide requise avec valeur probante conformément à son régime juridique/constitutionnel. La Colombie présentera les requêtes à la République de l'Équateur par l'entremise du Bureau du Procureur général ou du Ministère de la Justice et des Affaires juridiques.

#### *Article VII. Législation applicable*

1. Les requêtes seront exécutées conformément à la législation de la Partie requise.

2. La Partie requise fournira une entraide judiciaire conformément aux modes et procédures spéciaux indiqués dans la requête par la Partie requérante, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec sa législation interne.

*Article VIII. Confidentialité*

La Partie requise et la Partie requérante préserveront le caractère confidentiel de la requête et de l'octroi d'une entraide judiciaire à moins que leur divulgation soit nécessaire à l'exécution de la requête, auquel cas elles agiront conformément à leur législation interne et avec l'autorisation de l'autre Partie.

*Article IX. Requêtes aux fins de l'entraide judiciaire*

1. Les requêtes aux fins de l'entraide judiciaire seront formulées par écrit et contiendront au moins les renseignements ci-après :

- a. Le nom de l'autorité compétente chargée de l'enquête ou de l'instruction pénale;
- b. L'objet de la requête et la description des mesures d'entraide requises
- c. La description des faits constitutifs du délit faisant l'objet de l'enquête, accompagnée de la transcription ou de la copie des dispositions juridiques relatives audit délit;
- d. La description détaillée et le fondement juridique de toute procédure particulière dont la Partie requérante demande l'exécution;
- e. Les délais dans lesquels, étant donné la nature de la requête, la Partie requérante demande qu'elle soit exécutée;
- f. L'identité, la nationalité et la résidence ou le domicile de la personne faisant l'objet d'une sommation ou d'une notification de comparaître pour fournir l'assistance en matière pénale conformément au présent Accord.

2. En cas d'urgence exclusivement, les requêtes seront transmises par facsimilé ou tout autre moyen électronique qui sera suivi dès que possible d'une confirmation écrite.

*Article X. Entraide conditionnelle*

1. Si l'autorité compétente de la Partie requise détermine que l'exécution d'une requête ferait obstacle à une enquête ou procédure pénale en cours dans son État, elle peut ajourner l'exécution de ladite requête ou émettre des conditions, en tout ou en partie, en donnant expressément les raisons de cette décision.

2. L'autorité de la Partie requise informe l'autorité de la Partie requérante en conséquence afin de voir si celle-ci accepte l'entraide conditionnelle, auquel cas elle devra respecter les conditions mises à son exécution.

*Article XI. Rejet de la requête*

1. La Partie requise peut refuser de fournir l'entraide, à sa discrétion, lorsque :

- a. La requête d'entraide judiciaire est contraire à son système juridique interne et/ou aux dispositions du présent Accord;
- b. Elle estime que l'exécution de la requête ferait obstacle à une enquête, instruction ou poursuite pénale en cours dans son État, sous réserve des dispositions de l'Article X du présent Accord;



c. La demande d'entraide judiciaire porte sur un délit à propos duquel la personne intéressée a été jugée non coupable ou, si elle a été condamnée, a purgé sa peine ou si cette peine a expiré;

d. L'enquête a été ouverte aux fins d'engager des poursuites ou d'exercer une discrimination de quelque forme que ce soit contre une personne ou un groupe de personnes pour des motifs de race, sexe, condition sociale, nationalité, religion ou toute autre forme de discrimination;

e. L'octroi de l'assistance pourrait porter atteinte à l'ordre public, à la souveraineté, à la sécurité nationale ou aux intérêts essentiels de la Partie requise;

f. La requête d'entraide judiciaire se réfère à un délit politique, militaire ou assimilé.

2. La Partie requise notifie par écrit le rejet de la requête à la Partie requérante en précisant les motifs de sa décision.

#### *Article XII. Exécution de la requête d'entraide judiciaire*

1. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise fixe la date et le lieu d'exécution de la requête d'entraide judiciaire, par écrit.

2. Les autorités compétentes de la Partie requise recueillent les preuves conformément à son système juridique et celles-ci seront évaluées conformément au système juridique de la Partie requérante.

#### *Article XIII. Comparution devant les Parties*

1. Toute demande d'entraide judiciaire adressée à la Partie requise et comportant la sommation d'un témoin ou d'un expert à comparaître devant les autorités compétentes de la Partie requérante sera communiquée au moins 45 jours avant la date fixée pour la procédure visée dans la requête. Toutefois, la Partie requérante peut, exceptionnellement, réduire cette période.

2. L'autorité compétente de la Partie requise signifie la citation à comparaître conformément à la requête formulée et la personne faisant l'objet de la sommation peut librement et expressément décider de comparaître en personne sur le territoire de la Partie requérante ou de soumettre son témoignage par écrit.

3. Si la Personne faisant l'objet de la sommation fait valoir son droit à l'immunité ou à l'incapacité en vertu de la législation de la Partie requise, la question sera réglée par l'autorité compétente de la Partie requise et le résultat sera communiquée à la Partie requérante.

4. La requête d'entraide judiciaire garantit les moyens de transport et les indemnités de déplacement, frais de subsistance, assurance-vie ou accident pour la personne faisant l'objet de la sommation, laquelle consent librement à se rendre sur le territoire de la Partie requérante pour une période ne dépassant pas celle qui est considérée comme strictement nécessaire par la Partie requérante, et qui ne doit pas dépasser huit jours à partir de la date d'arrivée sur le territoire jusqu'à la date du retour dans le pays d'origine.

*Article XIV. Protection des personnes*

1. Aucun témoin ou expert comparaisant devant l'autorité compétente de la Partie requérante en réponse à une sommation ne peut être poursuivi, arrêté ou soumis à toute restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de ladite Partie pour des faits ou des condamnations antérieures à son départ du territoire de la Partie requise.

2. La garantie prévue au paragraphe 1 cesse d'avoir effet si, à l'achèvement de l'enquête à propos de laquelle la personne en question comparait comme témoin ou expert ladite personne ne retourne pas dans son pays d'origine dans un délai maximum de cinq jours après avoir fourni sa coopération. Ce délai peut être prolongé en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles dûment confirmées par la Partie requérante.

*Article XV. Personnes en détention*

1. Si la sommation à comparaître devant l'autorité compétente de la Partie requérante vise une personne qui est détenue sur le territoire de la Partie requise, ladite personne devra consentir par écrit à l'exécution de la requête et bénéficier des avantages prévus au paragraphe 4 de l'Article XIII du présent Accord.

2. La Partie requérante est tenue d'assurer la garde du détenu et de le remettre dans les mêmes conditions dès que sa présence n'est plus nécessaire aux fins qui ont motivé son transfert, à moins que l'autorité centrale de la Partie requise ne demande spécifiquement par écrit que la personne en question soit relâchée et jouisse de la protection prévue à l'Article XIV du présent Accord.

3. La décision de transférer la personne en question conformément au paragraphe 1 du présent Article est laissée à la discrétion de la Partie requise dans tous les cas et le refus de transfert doit être justifié par des raisons constitutionnelles ou juridiques et autres considérations liées à la sécurité ou à la convcnance de la Partie requise.

*Article XVI. Mesures provisoires ou conservatoires*

1. Chaque Partie peut demander à l'autre d'adopter les mesures conservatoires prévues à l'alinéa f de l'Article premier du présent Accord afin d'assurer que les biens, instruments ou produit de l'infraction ou leur valeur équivalente soient disponibles si un ordre de confiscation a été donné ou pour compenser les dommages ou pertes ayant résulté d'une condamnation pénale.

2. Une demande d'adoption de mesures conservatoires comprendra, outre les renseignements visés à l'Article IX du présent Accord, les éléments ci-après :

a. Une copie de l'ordonnance judiciaire finale justifiant la requête, accompagnée des faits sur lesquels elle repose et de sa base juridique;

b. Si possible, la description, la localisation et la valeur estimative des biens dans le contexte de l'alinéa e de l'Article premier du présent Accord ainsi que leur rapport avec la personne dont les biens sont l'objet d'une mesure conservatoire.

3. Les autorités centrales de chacune des Parties s'informeront immédiatement de la présentation de tout recours pouvant rendre invalides les mesures conservatoires requises et de la décision adoptée en la matière.

4. L'autorité centrale de la Partie requise peut décider de limiter la durée de la mesure conservatoire demandée et notifiera promptement à l'autorité centrale de la Partie requérante le délai fixé, avec justifications.

5. Toute requête sera exécutée exclusivement en conformité avec la législation interne de la Partie requise et en particulier en observant strictement et en garantissant les droits constitutionnels de toute personne pouvant être touchée par l'exécution de cette mesure.

#### *Article XVII. Confiscation et son exécution*

1. Conformément à leurs législations internes respectives, les Parties coopéreront dans l'exécution de mesures permanentes, en ce qui concerne les biens liés à la procédure pénale, à condition qu'une décision judiciaire finale et exécutoire ait été prise.

2. Aux fins du présent Article, les dispositions de l'Article 1X et du paragraphe 2 de l'Article XVI du présent Accord s'appliquent.

3. Dans le cas d'infraction ayant trait au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, les Parties conviendront, conformément à la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988, de la répartition de la valeur des biens confisqués, suite à la coopération prévue dans le présent Accord.

#### *Article XVIII. Intérêts des tiers de bonne foi à l'égard des biens*

1. Conformément aux dispositions du présent Accord, la Partie requise adopte, conformément à sa législation interne, toutes les mesures nécessaires pour protéger les intérêts et droits de tiers de bonne foi à l'endroit des biens qui sont touchés par l'exécution des requêtes d'entraide judiciaire.

2. Toute personne touchée par une ordonnance de saisie conservatoire, de blocage, de saisie, de mise sous séquestre ou de confiscation peut introduire un appel conformément à la législation interne de la Partie requise.

#### *Article XIX. Frais*

1. Les frais ordinaires pour l'exécution d'une requête d'entraide judiciaire sont à la charge de la Partie requise. En cas de frais extraordinaires, les Parties se concertent afin de déterminer les conditions d'exécution de la requête ainsi que la formule de répartition des frais.

2. Les frais de déplacement, de logement et autres dépenses prévues dans le présent Accord des personnes qui sont appelées à se déplacer en vertu d'une requête d'entraide judiciaire sont à la charge de la Partie requérante.

*Article XX. Dispense d'authentification*

Les documents mentionnés dans le présent Accord, signés et soumis par les autorités centrales des États, sont dispensés de toute authentification consulaire ou autre formalité analogue.

*Article XXI. Concertations*

Les autorités centrales des Parties se concerteront afin d'assurer que le présent Accord soit mis en œuvre de façon efficace.

*Article XXII. Règlement des différends*

Tout différend qui s'élèverait entre les Parties en ce qui concerne l'interprétation ou l'application du présent Accord sera réglé par les Parties par la voie diplomatique.

*Article XXIII. Entrée en vigueur et dénonciation*

1. Le présent Accord entrera en vigueur soixante (60) jours à compter de la date à laquelle les Parties se seront notifiées par échange de notes diplomatiques l'accomplissement de leurs obligations constitutionnelles et juridiques respectives.

2. Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment par une note diplomatique qui prendra effet six (6) mois après la date de sa réception par l'autre Partie. La dénonciation ne touche pas les requêtes d'entraide judiciaire en cours.

Fait à Santafé de Bogotá, le 18 décembre 1996, en double exemplaire en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République de Colombie :

CAMILO REYES R.

Pour le Gouvernement de la République de l'Équateur :

GALO LEORO F.